

la propiedad minera y la vuelta del yacimiento minero al dominio del Estado es menester: "*La falta de pago de dos patentes consecutivas*". "La disposición del art. 127 se dictó como un complemento de las reglas de amparo; por cuanto se había observado que muchas veces por negligencia de los tesoreros en el envío de las nóminas de los deudores morosos o por omisión en ellas de alguna pertenencia desamparada, o bien por falta de cumplimiento debido y oportuno de los trámites del remate, muchas pertenencias quedaban libres de la sanción que les correspondía por lo cual en 1928 se dictó la ley N° 4.256 agregándose al Código de Minería un artículo que es similar al actual 127 sancionando con la caducidad a las pertenencias que por cualquier causa se dejare de pagar la patente durante dos períodos consecutivos".

En consecuencia se incurre en una caducidad ipso jure por el solo ministerio de la ley a las doce de la noche del 31 de marzo cuando se cae en mora del segundo pago. Pero, como ya se ha dicho, es indispensable que se dejen de pagar dos patentes consecutivas y habiéndose pagado la patente del primer año con atraso, sólo existe impaga una patente que es la del segundo año.

Las disposiciones de los arts. 116, 117, 118 y 120 del Código de Minería se encuentran reglamentadas en los arts. 58 a 60 del Reglamento del Código citado y de estos preceptos se infiere que una patente puede ser pagada con retraso hasta el día del remate pagando la multa correspondiente y este pago es perfectamente válido y mantiene al dueño en el goce de la propiedad minera, por lo cual si se atrasa en el pago de la patente del año siguiente, sólo tiene impaga una patente y no ha dejado de pagar dos patentes consecutivas que es el requisito indispensable para que se produzca la caducidad de la concesión minera.

5° Que en consecuencia el fallo al rechazar la caducidad de la propiedad minera sosteniendo que la sociedad Legal Minera María Inés de Tarapacá no había dejado de pagar dos patentes consecutivas, sino que se atrasó en el pago de ellas, las cuales fueron canceladas con posterioridad, dio correcta aplicación a lo dispuesto en el art. 127 del Código de Minería y también interpretó en forma acertada los arts. 114, 115, 116 y 120 del mismo Código y por consiguiente el recurso de casación en el fondo deducido por el Instituto de Investigaciones Geológicas debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 764, 767, 787 y 809 del Código de Procedimiento Civil, se declara sin lugar el recurso de casación en el fondo interpuesto a

fs. 118 contra la sentencia de 29 de noviembre último, con costas en que se condena solidariamente al recurrente y al abogado que lo patrocina.

Se aplica a beneficio fiscal la suma consignada.

Redacción del Ministro don Eduardo Varas Videla. — Eduardo Varas V. — Israel Bórquez M. — Octavio Ramírez M. — Darío Behavente G. — Enrique Munita B.

Cas. fondo — 9 de mayo de 1973

**Empresas Industriales El Melón S.A.
con Impuestos Internos**

Indemnización de perjuicios (daño emergente y lucro cesante) — Daño emergente (indemnización) — Lucro cesante (indemnización) — Cláusula penal (daño emergente) — Lucro cesante (renta) — Impuesto a la renta (lucro cesante).

DOCTRINA.— *Es inexacta la afirmación de que al disponer el art. 1.556 del Código Civil que la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, deba siempre, en un caso concreto, incluir ambos rubros en toda indemnización.*

Corresponde a las partes —o al tribunal, en su caso— determinar qué clase de daños comprende la indemnización.

Si no se ha establecido como hecho de la causa que la Empresa reclamante recibiera con esa indemnización lucro, beneficio o incremento patrimonial de cualquiera especie, no vulnera la sentencia los preceptos de los arts. 12, 13 y 14 de la Ley 8.419, ni 2 N° 6, 17 N° 1 y 20 N° 5 de la Ley de la Renta N° 15.564, que la ley desestima como materia de tributo.

Si el contrato no da origen a una obligación tributaria, la pena convenida para el ca-

de 29 de noviembre el
condena solidariamente
que lo patrocina.

il la suma consignada.

don Eduardo Varas Vi-
— Israel Bórquez M. —
— Benavente G. — En

*so de incumplimiento, tampoco puede ser
base de tributos.*

Don Gerardo Sabioncello Salinas, por el Fisco Chileno, interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Valparaíso, de fecha 28 de julio de 1972, en el reclamo a Impuestos Internos, formulado por las Empresas Industriales El Melón S.A.

El reclamo incide en el giro de diversos tributos entre los cuales se encuentran los rubros materia del recurso de casación que consisten en estimar como bienes constitutivos de renta el valor de dos indemnizaciones de perjuicios por incumplimiento de dos contratos de promesas de compraventa celebradas por esa Empresa, uno con la Compañía Minera Andina S.A., y el otro con la Compañía Técnica Andwandter Limitada.

El Director Regional de Impuestos Internos de Valparaíso, resolviendo el reclamo en primera instancia lo rechazó por sentencia que fue revocada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la que, al acogerlo, consideró que estas indemnizaciones, no estaban afectas al Impuesto a la Renta.

Contra este último fallo se ha presentado recurso de casación en el fondo por estimar que vulnera los preceptos de los artículos 12, 13 y 14 de la Ley N° 8.419, en relación con los artículos 1°, 20 y 1.556 del Código Civil respecto a la primera de las indemnizaciones y que vulnera las normas de los artículos 2° N° 6, 17 N° 1 y 20 N° 5 de la Ley de Impuesto a la Renta contenida en el artículo 5° de la Ley 15.564, en relación con los artículos 20 y 1.556 del Código Civil, respecto a la segunda.

La Corte:

Considerando:

1° Que son hechos de la causa establecidos en el fallo: a) que la Fábrica de Cemento El Melón S.A. prometió vender a la Compañía Minera Andina S.A., dos grupos eléctricos diesel en el precio de \$ 230.000 U.S.C., entregándose en el momento de la celebración de la promesa \$ 5.000 U.S.C. los que quedarían a beneficio del promitente vendedor, a título de indemnización, si no se celebraba la compraventa en el plazo estipulado, evento que ocurrió y por lo cual se hizo efectiva esa cláusula penal; b) que también la misma Sociedad prometió

comprar a la Compañía Técnica Andwandter Limitada, 24 automóviles marca "Acadian" en el precio de E° 341.000.— cantidad cancelada por el promitente comprador. Se estableció en el contrato la fecha de entrega de los vehículos y una multa para el caso de incumplimiento, la que ascendió a E° 125.904, suma que recibió la parte reclamante.

2° Que las cantidades anteriormente indicadas, recibidas a título de indemnización de perjuicios, fueron consideradas por la Dirección de Impuestos Internos, como sujetas a Impuesto a la Renta, aplicándole a la primera indemnización las normas de los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 8.419, considerando que ella representaba un beneficio o utilidad para la Empresa y a la segunda se le aplicaron las normas de los artículos 2° N° 6 y 20 N° 5 de la Ley de Impuesto a la Renta, establecida en el art. 5° de la Ley 15.564, porque a juicio de esa Dirección ella constituía un incremento de patrimonio, ya que esa indemnización cubría un lucro cesante y no un daño emergente. La reclamación de ese giro fue desechada por el Director Regional de Impuestos Internos de Valparaíso.

3° Que la Corte de Apelaciones revocó el fallo, sosteniendo que no estaban afectas a los tributos referidos, pues cubrían perjuicios o detrimentos.

4° Que el recurrente fundamenta las transgresiones a las leyes tributarias, en una interpretación que hace al artículo 1.556 del Código Civil. Este artículo dice: "La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante..."; de la palabra "comprende" infiere que todas estas indemnizaciones están necesariamente cubriendo ambos rubros —daño emergente y lucro cesante— y en consecuencia la cláusula penal, que es una indemnización de perjuicios pactada de antemano, por el solo hecho de celebrarse preestablece el hecho de que la pena compensa también un lucro o beneficio. Esta interpretación equivale a darle a la norma legal un alcance diferente al que le ha conferido el legislador, quien al emplear la expresión "comprende" otorga el derecho al acreedor para poder resarcirse de ambos perjuicios, ya provengan del daño sufrido, como también del beneficio de que se ha privado. En ningún caso la disposición citada especifica que la indemnización a que se tiene derecho incluya necesariamente ambas indemnizaciones. La determinación de cuáles son los daños indemnizados le corresponde hacerla o a las partes o al Tribunal.

5°) Que en el fallo materia del recurso, no ha quedado establecido que alguna de las indemnizaciones de perjuicios pactadas en las cláusulas penales mencionadas cubra lucros, beneficios o incremen-

mayo de 1973

El Melón S.A.
s Internos

uicios (daño emergen-
— Daño emergen-
— Lucro cesante (in-
— cláusula penal (daño
— cesante (renta) —
— lucro cesante).

acta la afirmación de
556 del Código Civil
perjuicios compren-
el lucro cesante, de-
concreto, incluir am-
mnización.

rtes —o al tribunal,
qué clase de daños
ción.

lo como hecho de la
reclamante recibiera
ucro, beneficio o in-
cualquiera especie,
los preceptos de los
ey 8.419, ni 2 N° 6,
la Ley de la Renta
sestima como mate-

origen a una obliga-
onvenida para el ca-

tos de patrimonios; siendo éste un hecho que debe ser debidamente determinado por el Tribunal. Ha sostenido el Fisco que en relación al primer contrato de promesa, esto es, respecto a los grupos eléctricos diesel, que la Empresa no sufrió daño alguno porque los conservó en dominio. Este argumento no tiene otra validez que el de una simple apreciación de una parte, sin embargo también puede considerarse que esos equipos sufren riesgos, desgastes, desvalorizaciones; y por ser artefactos que el progreso moderno está continuamente sustituyéndolos por otros de mejor aprovechamiento técnico van quedando obsoletos; también debe tenerse presente que al promitente vendedor se le privó de la posibilidad de disponer de los equipos mientras estuvo vigente el contrato, todo lo cual representa daños o detrimentos en su patrimonio. Respecto a la segunda promesa de venta, la indemnización resarce a la empresa tanto del capital que entregó como precio de los vehículos y que sólo se le devolvió después de un tiempo, como del hecho de que en ese lapso, estuvo privada de adquirir otros vehículos para satisfacer sus necesidades.

6º Que no estando establecido como hecho de la causa, que las Empresas Industriales El Melón, recibieron con estas indemnizaciones lucros, beneficios, incrementos de patrimonio o utilidades de cualquiera especie, no vulnera las disposiciones tributarias citadas, la sentencia que las desestima como sujetas a tributo.

7º Que toda cláusula penal representa una evaluación anticipada de perjuicios, establecida por las partes al contratar. El contrato crea derechos y obligaciones recíprocas. El derecho adquirido por la parte cumplidora es un bien jurídico que ha entrado a su patrimonio. La pena pactada sustituye ese bien. En consecuencia, si el contrato no da origen a una obligación tributaria la pena que sustituye al bien jurídico que nace del contrato y de que ha sido privado tampoco puede ser base de tributos. Sirva de ejemplo a lo dicho la promesa de venta que hace Cemento Melón de los equipos eléctricos. En el momento del contrato adquirió el derecho a recibir 230.000.— dólares en determinada época. Al privársele de ese derecho se le infirió un daño o menoscabo que se avaluó en 5.000.— dólares. Esta última cantidad no acrecentó su patrimonio sino que sustituyó el derecho a recibir en ese momento 230.000 dólares, derecho que no lo hacía deudor de tributos. Que la situación habría sido diferente si la Empresa de Cemento Melón hubiere prometido vender cemento, pues el precio de este producto es el que, precisamente, forma la utilidad de la Empresa.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 787 y 809 del Código de Procedimiento Civil, se declara sin lugar al recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de 28 de junio de 1972.

Redacción del Abogado integrante, señor José Vergara Vicuña. — Eduardo Varas V. — Israel Bórquez M. — Rafael Retamal L. — Octavio Ramírez M. — José Vergara V.

Cas. de oficio — 9 de mayo de 1973

Fábrica de Muebles Sociedad Industrial
Gleixner Ltda.
con Singer Sewing Machine Company

Recurso de casación en la forma (falta de decisión de asunto controvertido) — Sentencia (requisitos) — Decisión asunto controvertido (fallo de excepciones) — Juicio ejecutivo (fallo de excepciones) — Excepciones (juicio ejecutivo) — Casación de oficio (juicio ejecutivo) — Título ejecutivo (falta de requisitos).

DOCTRINA.— *Si en un juicio ejecutivo el ejecutado opone las excepciones de faltar al título algún requisito para que tenga fuerza ejecutiva, de litis pendencia y de nulidad de la obligación y el Juez a quo acoge la primera —desechando la demanda— sin entrar a pronunciarse sobre las otras dos excepciones, por no estar obligado a ello, pero la Corte revoca el fallo, desestima la excepción acogida y da lugar a la demanda sin pronunciarse sobre las otras dos excepciones, dicha sentencia no ha decidido totalmente el asunto controvertido, pues no se ha pronunciado —debiendo hacerlo— sobre todas las excepciones opuestas en el juicio y ha quedado afecta así al vicio de casación en la forma contemplado*